

AGOSTO 2021

DOSIER INTERNACIONAL DE DENÚNCIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL



APOINME
ARPIN SUDESTE
ARPINSUL
ATY GUASU
COIAB
COMISSÃO-
GUARANI YVYRUPA
CONSELHO DO
POVO TERENA

AGOSTO 2021

DOSIER INTERNACIONAL DE DENUNCIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BRASIL



APOINME
ARPIN SUDESTE
ARPINSUL
ATY GUASU
COIAB
COMISSÃO-
GUARANI YVYRUPA
CONSELHO DO
POVO TERENA

SUGERENCIA DE CITA:

*Dossier internacional de denúncias de los Pueblos Indígenas de Brasil 2021, Brasília:
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), 2021.B*

RESUMEN

- 5** INTRODUCCIÓN
- 9** SOBRE APIB
- 14** VIOLACIONES Y AMENAZAS A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN BRASIL
- 38** ¿QUÉ ACCIONES HA EMPRENDIDO APIB??
- 53** LLAMADOS A LA ACCIÓN

LISTA DE ABREVIATURAS

ADPF

Acción por
Incumplimiento de
Precepto Fundamental

AGU

Abogacía General de la
Unión

ANM

Agencia Nacional de
Minería

APIB

Articulación de los
Pueblos Indígenas de
Brasil

CUT

Central Única de los
Trabajadores

CADHu

Colectivo de Abogados
de Derechos Humanos

CPI

Corte Penal
Internacional

CPT

Comissão Pastoral da
Terra

CIMI

Consejo Indigenista
Misionero

Funai

Fundación Nacional del
Indio

IPRI

Derechos de los
Pueblos Indígenas
Internacional

INPE

Instituto Nacional
de Investigaciones
Espaciales

ISA

Instituto
Socioambiental

MNI

Movilización Nacional
Indígena

OIT

Organización
Internacional del
Trabajo

PL

Proyecto de Ley

PRODES

Proyecto de Monitoreo
de la Deforestación en
la Amazonía Legal por
Satélite

RE

Recurso Extraordinario

SESAI

Secretaría Especial de
Salud Indígena

DETER

Sistema de Detección
de la Deforestación en
Tiempo Real

SIGEF

Sistema de Gestión
Territorial

STF

Supremo Tribunal
Federal

TI

Tierra Indígena

UC

Unidades de
Conservación

INTRODUCCIÓN

Presentamos al mundo este **Dossier Internacional de Denuncias** que registra las graves violencias y amenazas que se ciernen sobre la vida, las personas y los territorios de los pueblos originarios de Brasil. Nuestra preocupación es elaborar un texto conciso y objetivo que permita comprender en toda su dimensión lo que ocurre actualmente en Brasil.

El documento, que reúne una serie de informaciones relevantes, tiene por objeto demostrar que se ha puesto en marcha un proyecto antiindígena amplio, abarcador y organizado que cuenta con la participación directa del Poder Ejecutivo, además de avanzar a grandes pasos en el Congreso Nacional y atravesar las decisiones que deben tomar los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), así como otras instancias del Poder Judicial. Este proyecto se alimenta de los discursos de odio y racistas proferidos por Jair Bolsonaro quien, incluso antes de asumir el cargo de presidente, eligió a los pueblos indígenas como sus principales enemigos. En el desempeño de sus funciones como jefe de Estado y de Gobierno, Bolsonaro debería obedecer y hacer cumplir la Constitución Federal, garantizando la seguridad y el bienestar de los pueblos que vivían en paz en este territorio, incluso antes de que pasara a llamarse Brasil.

No obstante, el mandatario adoptó una posición diametralmente opuesta a la indicada en la Carta Magna. Su postura irresponsable e ilegal no solo afecta el marco de protección conquistado a través de la lucha de los pueblos indígenas, sino que incentiva directa e indirectamente actos de agresión por parte de terceros. Cuando la máxima autoridad del país desprecia las leyes y demuestra odio por la humanidad, ¿qué se puede esperar de quienes se inspiran en esta figura abominable? Con esto en mente, APIB lucha incansablemente por los derechos de los pueblos indígenas y, como parte de las acciones que emprende, registró una denuncia contra Jair Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, en agosto de 2021.

Esta coyuntura, la más grave que los pueblos originarios han tenido que enfrentar en Brasil, debe ser combatida no solo por nosotros, sino por todos los que defienden los derechos humanos y tienen conciencia de que las consecuencias de este nefasto proyecto comprometen, en definitiva, el futuro de la especie humana en el planeta Tierra. Nosotros, los pueblos originarios, somos los principales guardianes de los bosques, de las fuentes de agua dulce y de la biodiversidad que están preservados en nuestros territorios. Al poner en riesgo las tierras indígenas, se incide sobre el agravamiento de la crisis climática y ambiental que ya afecta a todas las regiones y a todos los pueblos del mundo.

Por tanto, este dossier adquiere contornos que van mucho más allá de los intereses más objetivos de los pueblos indígenas en la medida que relata la destrucción de nuestros derechos, lo que

tendrá consecuencias nefastas para todos los seres humanos. Se lo entregará y registrará en instancias públicas brasileñas, en organismos multilaterales y también se lo enviará a países con los que Brasil mantiene relaciones diplomáticas.

La primera parte de este documento presenta a APIB, contando de nuestra trayectoria y de nuestro trabajo. A continuación, relatamos las violencias y las amenazas que padecemos actualmente en Brasil, tanto las de tipo institucional (que incluye las acciones del Gobierno Federal, del Poder Legislativo y las disputas legales analizadas por el Poder Judicial), como las socioambientales (que incluyen los conflictos generados en nuestro territorio por acciones del sector agrícola ganadero y minero, así como por la minería ilegal, el acaparamiento ilegal de tierras y la tala de árboles, etc.). Luego, señalamos las iniciativas que implementamos en el último período (2020 y 2021) para enfrentar esta coyuntura y finalmente hacemos una lista de sugerencias relativas a las acciones que nuestros aliados de todo el mundo pueden desarrollar para reforzar nuestra lucha en Brasil.

Esperamos con esto que nuestro grito sobre la urgencia de esta situación se escuche ampliamente. Pedimos la colaboración de todos y de todas, especialmente de nuestros aliados en todo el mundo, para que nos ayuden a difundir este documento. Vamos a frenar en conjunto esta secuencia de atrocidades que victimizan a nuestros pueblos antes de que lleguen a un punto sin retorno, en el que todo el planeta y a la humanidad estén en riesgo. ■

SOBRE APIB?

La **Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)** es una organización que representa y defiende los derechos de los pueblos originarios, creada por el movimiento indígena en el **Campamento Tierra Libre (ATL)** en 2005. ATL es una movilización nacional celebrada anualmente, desde 2004, con el objetivo de hacer visible la situación de los pueblos indígenas en Brasil, poner en evidencia y debatir las violaciones de sus derechos, y exigir que el Estado brasileño responda a sus demandas y reivindicaciones.

APIB es una instancia de referencia nacional del movimiento indígena en Brasil, creada de abajo hacia arriba. Agrupa a las organizaciones indígenas regionales y nació con el propósito de fortalecer la unión de los pueblos, la articulación entre las diferentes regiones y organizaciones indígenas del país, además de movilizar a los pueblos y a tales organizaciones contra las amenazas y agresiones a los derechos indígenas.

Actualmente, APIB está constituida por las siguientes organizaciones indígenas regionales ¹:

1 Cada una de las organizaciones de base de APIB opera en un área regional que representa a ciertos pueblos y que no coincide necesariamente con la división geográfica de las regiones oficiales del Estado brasileño. Estas áreas se estipulan principalmente con base en el bioma en el que se encuentran los pueblos. Para obtener más información sobre las organizaciones de base de APIB, consultar: <https://apiboficial.org/sobre>

- ARTICULACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL NORDESTE, MINAS GERAIS Y ESPIRITO SANTO (APOINME);
- CONSEJO DEL PUEBLO TERENA;
- ARTICULACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL SURESTE (ARPINSUDESTE);
- ARTICULACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL SUR (ARPINSUL);
- GRAN ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS GUARANÍES KAIOWÁ (ATY GUASU);
- COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA BRASILEÑA (COIAB);
- COMISIÓN YVYRUPA GUARANÍ



En su estructura orgánica, APIB reúne a líderes indígenas que representan a todas las regiones del país, abarcando la inconmensurable diversidad étnica de los pueblos originarios de Brasil. Cada una de las siete organizaciones de base de APIB, mencionadas anteriormente, designa a un líder para que la represente en la Coordinación Ejecutiva de APIB. Este colegiado toma las decisiones políticas con el apoyo de las Coordinaciones Técnicas de APIB.

Los datos del último censo, realizado en 2010 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), indicaron que la población indígena brasileña era de 817.963 indígenas, de los cuales 502.783 viven en áreas rurales y 315.180 viven en áreas urbanas brasileñas. Este contingente poblacional está repartido en 305 pueblos originarios, que hablan 274 lenguas. Según datos de la Fundación Nacional del Indio (Funai), actualmente en Brasil hay alrededor de 114 registros relativos a la presencia de pueblos indígenas aislados en toda la Amazonía Legal.

Desde el siglo XVI, en el período colonial, los pueblos indígenas han luchado y resistido para sobrevivir primero a la colonización portuguesa y luego a la implantación de un Estado genocida en su territorio. La política colonial y la formación del Estado brasileño llevaron al exterminio de pueblos enteros, a su esclavitud, a su dominación y a su tutela judicial. Para responder a estas prácticas históricas de violencia, los pueblos indígenas se han organizado para reivindicar su derecho a la existencia y a mantener su cultura ancestral. Aprovechando la experiencia del movimiento indígena, que en la década de los 80 se articuló en la Asamblea

Constituyente brasileña, los líderes indígenas volvieron a reunirse en torno a APIB para defender sus derechos a nivel nacional e internacional.

El objetivo de APIB es promover la movilización y articulación permanente del movimiento indígena en diferentes regiones y a nivel nacional. Esto significa formular e implementar programas de capacitación de líderes y organizaciones indígenas, evaluar la actuación del poder público e incidir en la elaboración e implementación de políticas específicas y diferenciadas dirigidas a los pueblos originarios.

Así, APIB viene monitoreando la política indigenista brasileña relacionada con distintas áreas, tales como la salud y la educación, las tierras, el medio ambiente, la legislación, la sostenibilidad, los derechos humanos, la participación y el control social. También ha combatido la persecución y la criminalización de líderes indígenas, además de buscar asegurar la participación indígena en los órganos de toma de decisiones del Estado.

A pesar de todos estos ataques y teniendo que enfrentar la actual crisis de salud que no tiene precedentes, los pueblos indígenas de Brasil resisten y siguen luchando por la defensa de lo que es más sagrado para ellos: sus tierras y sus territorios. Asegurar el buen vivir para nuestras generaciones actuales y futuras también contribuye a la preservación de los distintos biomas, de la biodiversidad y del equilibrio climático, lo que es importante no solo para los pueblos indígenas, sino para todo el planeta y para el futuro de la humanidad. ■

**VIOLACIONES
Y AMENAZAS A
LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS EN
BRASIL**

Las amenazas y los ataques que sufren los pueblos indígenas han sido perpetrados en su mayor parte por el gobierno de Bolsonaro, sea a través de discursos públicos de odio y mensajes racistas contra los pueblos originarios, o del proceso de destrucción de políticas y organismos públicos destinados a preservar los derechos indígenas y socioambientales. Dichas amenazas no se restringen, sin embargo, a los actos y omisiones del Poder Ejecutivo, sino que también están presentes en debates en el Poder Legislativo y en juicios relevantes del Poder Judicial. Este escenario institucional se refleja en un considerable aumento de los conflictos y las invasiones a nuestros territorios promovidos por grandes corporaciones e individuos interesados en desarrollar en tierras indígenas actividades de minería, agricultura, ganadería o otros intereses, trayendo más violencia y muerte a nuestros pueblos.

En esta sección relatamos las principales violaciones y amenazas a los derechos de los pueblos indígenas en Brasil en un período reciente (2020-2021), organizándose de la siguiente manera: (i) Amenazas institucionales: el avance de la agenda antiindígena en las entrañas del Estado brasileño; y (ii) Amenazas sociales y ambientales: vidas y territorios indígenas bajo la mira del poder económico.

AMENAZAS INSTITUCIONALES: EL AVANCE DE LA AGENDA ANTIINDÍGENA EN LAS ENTRAÑAS DEL ESTADO BRASILEÑO

Brasil está gobernado por un facineroso. Bolsonaro dirige su odio y su poder de destrucción especialmente contra nosotros, los pueblos originarios. Incluso antes de asumir la presidencia de la República, afirmó que en su gobierno no se demarcaría ni un solo centímetro de tierras indígenas. Este discurso va más allá de lo simbólico y se traduce en una verdadera política pública de destrucción de los derechos y de los aparatos estatales que fueron contruidos con tanta lucha, durante décadas, para proteger a los pueblos indígenas y sus territorios.

El desmantelamiento de las políticas indigenistas se hace evidente, por ejemplo, en lo relacionado con la Fundación Nacional del Indio (Funai), el organismo del Estado brasileño responsable de proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas y de llevar adelante las etapas esenciales de los procesos de demarcación de tierras. Este organismo ha sufrido ataques constantes y cambios estructurales significativos (por falta de recursos humanos, técnicos y financieros e injerencia política) que han producido un gran impacto en el cumplimiento de sus objetivos institucionales en lo que atañe a los pueblos indígenas, especialmente con respecto a la demarcación de tierras.

Como si no bastara haberse abstenido de su deber institucional de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, la Funai más

recientemente se ha vuelto contra sus defensores, en particular contra APIB. Una de nuestras coordinadoras ejecutivas, Sônia Guajajara, fue intimada a declarar en la Policía Federal, en abril de 2021, a causa de la [serie-web Maracá²](#), producida con la finalidad de denunciar los atentados y las violaciones a los derechos durante la pandemia del COVID-19 y lanzada durante una live internacional que contó con la presencia de numerosos simpatizantes, artistas y personalidades brasileñas e internacionales. El sumario abierto por la Policía Federal fue anulado por el Departamento Jurídico de APIB que presentó un habeas corpus en su defensa.

PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LÍDERES INDÍGENAS

En abril de 2021, APIB e Indigenous Peoples Rights International (IPRI) publicaron el informe [“Uma Anatomia das Práticas de Silenciamento Indígena”³](#), (Un Análisis de las Prácticas de Silenciamiento Indígena), que detalla el escenario de persecución y criminalización de líderes indígenas en Brasil.

Se relatan, de manera detallada, casos que involucran a 10 líderes de tierras indígenas de todo Brasil.

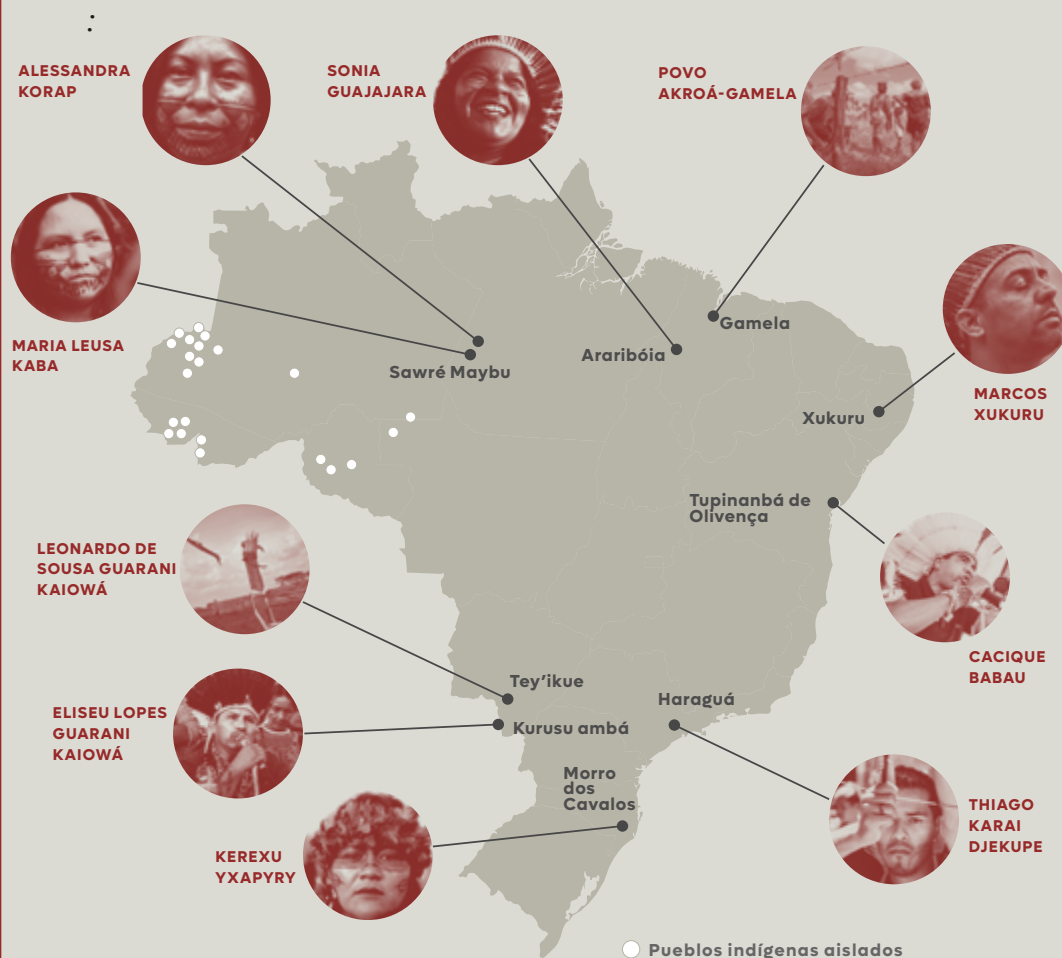
El informe muestra las técnicas de persecución y penalización que utiliza el poder estatal para tratar de silenciar la lucha de los pueblos originarios. Estas incluyen prácticas tales como: encarcelamiento, conducción compulsiva, allanamiento de vivienda, persecución física y política, amenazas a través de las redes sociales, acoso policial y judicial, persecución de líderes políticos locales, entre muchas otras.

² Disponible en: <https://emergenciaindigena.apiboficial.org/maraca/>

³ Disponible en: <https://apiboficial.org/2021/05/11/uma-anatomia-das-praticas-de-silenciamento-indigena/>

Este tipo de persecución busca frenar la lucha en pro de los distintos derechos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho al territorio, a la seguridad alimentaria, en defensa del medio ambiente, contra la invasión de las tecnologías de la información por parte de terceros, los derechos políticos y la representación.

A continuación, reproducimos un mapa que forma parte del informe y en el que constan los nombres de los líderes indígenas, que fueron víctimas de persecución, y sus tierras de origen:



Jair Bolsonaro reiteradamente sostiene discursos y actos violentos y discriminatorios contra los pueblos originarios brasileños, además de obstar, a través de una serie de acciones administrativas y legales, la integridad de las tierras demarcadas y la continuidad de los procesos de demarcación de los territorios. No se trata simplemente de una discusión sobre la tierra: los pueblos indígenas brasileños existen a partir de su relación con el territorio, que es el espacio en el que pueden proyectar y desarrollar su forma de vida, su organización social, política y cultural. Atacar sus tierras es atacar directamente a los pueblos indígenas.

En lo que se refiere a la demarcación de las tierras indígenas, no se trata de “querer o no querer”, ni de convicciones políticas, sino de un derecho de los pueblos originarios que está garantizado por la Constitución Federal de 1988. Es un deber de todas y de todos los jefes de Estado. Negar este derecho es contrariar la ley y constituye un delito. El gobierno de Bolsonaro, en este sentido, es reo confeso y trata en todo momento de legalizar los delitos cometidos contra nosotros, los pueblos indígenas.

Además de intervenir directamente en las estructuras de los órganos e instituciones indígenas, el Gobierno Federal permite y promueve una serie de violaciones a los derechos constitucionales y a los derechos humanos. Hasta mayo de 2020, el actual gobierno había certificado 114 haciendas en el Sistema de Ordenamiento Territorial (Sigef) que se superponen con áreas indígenas no homologadas, contrariando los dictámenes jurídicos previos. En su conjunto, estas haciendas ocupan más de 250.000 hectáreas

de áreas indígenas. En medio de una pandemia, el Gobierno Federal promueve públicamente la invasión criminal de territorios tradicionales.

La revisión de áreas previamente homologadas amenaza a los pueblos originarios cuyo derecho sobre las mismas ya habían sido reconocidos, y los expone a amenazas de muerte, a asesinatos, invasiones, destrucción de su territorio y contaminación de los recursos naturales. El discurso de Bolsonaro incentiva dichos ataques y significa para los delincuentes una legitimación de las ofensivas y de las violencias perpetradas contra los pueblos indígenas y contra sus formas de vida.

La Constitución brasileña establece que las tierras indígenas son bienes de la Unión (art. 20, inc. XI), pero, al mismo tiempo, reconoce que *“las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios se destinan a su posesión permanente, correspondiéndoles el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes”* (art. 231, párr. 2). Y agrega: *“Las tierras a las que se refiere este artículo son inalienables e indisponibles y los derechos sobre ellas son imprescriptibles”* (art. 231, párr. 4), y, por último, según la Carta Magna: *“Son nulos, extinguidos y no producen efectos jurídicos, los actos que tengan por objeto la ocupación, el dominio y la posesión de las tierras a las que se refiere este artículo”* (art. 231, párr. 6).

De acuerdo con el relevamiento del Consejo Indigenista Misionero (CIMI)⁴, realizado en 2018, existen aproximadamente 1.290 tierras

⁴ Disponible en: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2019/09/relatorio-violencia-contra-os-povos-indigenas-brasil-2018.pdf>

indígenas en Brasil, de las cuales 408 están regularizadas, 287 están en alguna etapa del procedimiento de demarcación, 40 son reservas, 21 son dominiales, 06 se encuentran bajo restricción debido a la presencia de pueblos aislados y aproximadamente 528 son reivindicadas por los pueblos, sin ningún reconocimiento por parte del organismo indigenista.

El Estado siempre ha tardado en reconocer y regularizar las tierras indígenas. Los diferentes gobiernos se omitieron o simplemente cedieron a las presiones políticas, económicas, empresariales y corporativas interesadas en las tierras y en las riquezas que los pueblos originarios han protegido durante milenios. De no haber sido así, todas las tierras indígenas ya estarían demarcadas, tal como lo establece la Constitución Federal de 1988, en la que se determinó un plazo de cinco años para ello, es decir, hasta 1993. Cabe mencionar que se estipuló este plazo con la intención de acelerar la demarcación de las tierras, dentro de un tiempo razonable. Este plazo no fue cumplido y el Estado brasileño está 30 años atrasado.

El gobierno de Bolsonaro, sin embargo, ha asumido una postura aún más perjudicial contra los pueblos indígenas, haciendo retroceder los procesos de demarcación. Se devolvieron 17 trámites administrativos que estaban listos para que el presidente los homologara, con base en el dictamen 001/17 de la Abogacía General de la Unión (AGU), medida que ha orientado tanto a la Funai como a los fiscales a negarse a defender los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

El actual presidente de la Funai, Marcelo Augusto Xavier da Silva, publicó el 22 de abril de 2020 la instrucción normativa n.º 09, que autoriza la emisión de títulos de propiedad privada en tierras indígenas no homologadas. Marcelo es comisario de la Policía Federal y se desempeñó como asesor de la bancada ruralista en el Congreso Nacional.

Finalmente, el avance de la pandemia del COVID-19 puso aún más en evidencia las desastrosas consecuencias del desmantelamiento de las estructuras de apoyo a los pueblos originarios. La SESAI (Secretaría Especial de Salud Indígena) ya venía siendo desmantelada por el Gobierno de Bolsonaro. Esto, combinado con un nuevo virus altamente contagioso y letal provocó la muerte de más de 1.100 indígenas. Incluso hoy, con la vacunación en curso, se revela el alcance de la negligencia de este gobierno con respecto a nuestros pueblos: la Funai⁵. invirtió menos del 1% del presupuesto destinado a la prevención del COVID-19. Y, contrariando lo que señalan los estudios científicos, el Gobierno Federal envió a nuestras comunidades grandes cantidades de hidroxiclороquina, un medicamento que es ineficaz para combatir el virus⁶.

Esta situación llevó a APIB y a CONAQ (Coordinación Nacional de Articulación de Quilombos) a interponer demandas ante el Supremo Tribunal Federal (STF), demostrando la omisión del Estado en lo que atañe a su deber de velar por la salud de los pueblos originarios y tradicionales.

⁵ Disponible en: <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,funai-executa-menos-de-1-dos-recursos-de-combate-a-covid-19-entre-indigenas,70003784257>

⁶ Disponible en: <https://www.brasildefato.com.br/2021/07/20/governo-bolsonaro-entope-aldeias-indigenas-com-cloroquina>

EL FUTURO DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS PASA POR LAS MANOS DEL PODER JUDICIAL

Los principales temas litigiosos que involucran a pueblos indígenas y sus territorios en Brasil implican cuestiones constitucionales, como mencionado anteriormente. De esta manera, transitan por el Supremo Tribunal Federal, que es responsable de resolver las controversias relacionadas con la Constitución, decisiones que constituirán la orientación jurisprudencial que deben observar las instancias judiciales inferiores y que también influyen directamente sobre todas las políticas públicas y futuros cambios legislativos.

El tema más controvertido sobre los pueblos indígenas que está en discusión en el STF es la tesis del “Marco Temporal”. Este debate se desarrolla en los autos del Recurso Extraordinario (RE) n.º 1.017.365, que atañe a los pueblos Xokleng, Kaingang y Guaraní de TI Xokleng La Klaño, en el estado de Santa Catarina.

Lo que está en juego es el debate sobre la teoría del Indigenato⁷ (Derecho Originario) y la teoría del Fato Indígena (Marco Temporal) que la bancada ruralista insiste en consolidar, argumentando que los indígenas solo tendrían derecho a las tierras que ya poseían físicamente el 5 de octubre de 1988, fecha en que se promulgó nuestra Constitución. Una posible victoria de estos argumentos redundará en la anulación de los procedimientos de demarcación

7 Teoría por la cual el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionalmente ocupadas es anterior a la creación del Estado brasileño, debiendo este último únicamente demarcar y declarar los límites espaciales de este territorio.

y en el aumento de los conflictos y de los actos de violencia contra los pueblos y comunidades indígenas, además de permitir diversos actos ilícitos como la minería ilegal, la deforestación y el acaparamiento de tierras, que son incluso incentivados por el actual gobierno.

El año pasado, los ministros consideraron que el Recurso Extraordinario es de Repercusión General, es decir que tendrá carácter vinculante, repercutiendo en todos los casos similares del país. El STF retomará y juzgará este caso, que puede definir [el futuro de los pueblos indígenas de Brasil](https://apiboficial.org/2020/10/22/julgamento-historico-pode-definir-o-futuro-das-terras-indigenas-do-brasil/)⁸, el 25 de agosto de 2021

EL PODER QUE REDACTÓ LA CONSTITUCIÓN ESTÁ A PUNTO DE NO CUMPLIR LO QUE SE ESTABLECE EN ELLA

Los ataques legislativos contra los derechos de los pueblos indígenas no se limitan a la discusión sobre el Marco Temporal. Hay una serie de proyectos de ley, que amenazan seriamente los derechos territoriales y constituyen violaciones a los derechos humanos, que están en votación en el Congreso brasileño con la participación directa de la bancada ruralista y el respaldo público del Poder Ejecutivo.

A continuación, enumeramos los principales proyectos que más amenazan los derechos de los pueblos originarios en Brasil:

⁸ Disponible en:

<https://apiboficial.org/2020/10/22/julgamento-historico-pode-definir-o-futuro-das-terras-indigenas-do-brasil/>

1. PL 490/2007:

propone transferir al Congreso Nacional la competencia para demarcar las tierras indígenas, además de otras medidas que violan el derecho de usufructo exclusivo de las mismas. Esta innovación, que no respeta la Constitución, hace inviable la demarcación de las tierras indígenas, permite que el gobierno retome de los pueblos originarios áreas reservadas y limita el usufructo y la gestión de las tierras por parte de estos pueblos, al autorizar que actores externos exploren los recursos hídricos y las potenciales fuentes de energía. Finalmente, este proyecto de ley viola el derecho de los pueblos indígenas a la consulta sobre proyectos y la instalación de infraestructuras en sus territorios, y además flexibiliza y no respeta la política indigenista de no contacto con los pueblos originarios aislados.

RIESGO INMINENTE DE APROBACIÓN DEL PL 490

El proyecto de ley 490 de 2007 se encuentra en una etapa avanzada de tramitación en la Cámara de Diputados y fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia, en junio de 2021, mientras que, afuera del Congreso, los indígenas que se oponían a esta aberración legal eran agredidos por las fuerzas policiales. Ahora, el proyecto de ley pasa a deliberación en reunión plenaria de la Cámara de Diputados y, de aprobarse, será enviado al Senado Federal. Se trata, por lo tanto, de la amenaza legislativa más inminente contra los derechos de los pueblos originarios.

2. PL 2633/2020:

conocido como el Proyecto de Ley sobre el acaparamiento de tierras (grilagem) debilita el control sobre la ocupación de tierras públicas, abriendo camino para que se conceda la amnistía a los ocupantes ilegales y delincuentes ambientales, especialmente en la Amazonía, además de favorecer la impunidad con respecto a los delitos ambientales y promover dinámicas de deforestación e incendios, al mismo tiempo que debilita las normas de regularización ambiental. El proyecto de ley fue aprobado subrepticamente por la Cámara de Diputados la noche del 3 de agosto y a continuación será evaluado por el Senado Federal.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS (GRILAGEM)?

Se trata de un procedimiento de invasión, ocupación y comercio ilegal de áreas públicas. La práctica está directamente relacionada con la deforestación y la destrucción de la biodiversidad además de, claro está, amenazar a los pueblos originarios que tradicionalmente ocupan esas tierras.

Alrededor del 30% de la deforestación y de las quemas en la Amazonía, en 2019, se produjeron en áreas públicas “no designadas”¹⁰, es decir, que muy probablemente son objeto de acciones de acaparamiento de tierras según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam, por su sigla en portugués). De acuerdo con Imazon (Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía), la aprobación definitiva del PL 2.633 puede provocar, hasta el 2027, una deforestación adicional de aproximadamente 16 mil kilómetros cuadrados, un área equivalente a casi tres veces el territorio del Distrito Federal.

⁹ Disponible en:

<https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/pl-da-grilagem-tudo-o-que-voce-precisa-saber>

¹⁰ Áreas que no fueron delimitadas como unidad de conservación y aún pertenecen al gobierno.

3. PL 984/2019:

tiene como objetivo atravesar el Parque Nacional Iguazú, la última gran área de reserva del Bosque Atlántico del interior del país, reabriendo una carretera justamente a través del tramo más sensible de la zona en términos ecológico, dado que allí viven especies en peligro de extinción como el jaguar. La iniciativa promoverá la deforestación y generará un grave impacto ecológico, económico y turístico en la región. Estudios ambientales demuestran que la reapertura de la carretera traerá consigo el aumento de la caza, el atropellamiento de animales silvestres y la deforestación, además de la incursión de especies exóticas invasoras, incendios y contaminación¹¹.

4. PROYECTO DE DECRETO LEGISLATIVO 177/2021:

autoriza al presidente de la República a denunciar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de los principales instrumentos mundiales de protección de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales.

5. PL 191/2020:

autoriza la explotación de tierras indígenas mediante grandes proyectos de infraestructura y minería, permitiendo la búsqueda y extracción de recursos minerales e hidrocarburos, para el aprovechamiento de recursos hídricos destinados a la generación de energía eléctrica en tierras indígenas e instituye indemnizaciones por la restricción al usufructo de las tierras indígenas.

¹¹ Available at: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/na-semana-do-meio-ambiente-camara-quer-votar-urgencia-de-projeto-que-ameaca-parque-do-iguacu>

AMENAZAS SOCIALES Y AMBIENTALES: VIDAS Y TERRITORIOS INDÍGENAS BAJO LA MIRA DEL PODER ECONÓMICO

El desmantelamiento de las políticas públicas, los avances legislativos y el discurso de odio promovido por el gobierno federal tienen consecuencias directas sobre los pueblos originarios, al mismo tiempo que extienden y legitiman la invasión y el acaparamiento de tierras indígenas y la práctica de delitos ambientales tales como la deforestación y los incendios, aumentando la presión sobre los territorios en todo el país, así como se incrementa la escalada de violencia contra los pueblos indígenas y sus derechos.

El [Informe del impacto del COVID-19 sobre los pueblos indígenas](#)¹² publicado por APIB en noviembre de 2020, presentó algunos de los conflictos, asesinatos, ataques, invasiones y persecuciones que sufren los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia. En 2021 se produce un aumento de las operaciones de invasión, persecución y usurpación de territorios indígenas que culmina con dos ataques directos a aldeas indígenas del pueblo Yanomami y Munduruku.

En el estado de Pará, donde se registraron 41 casos de invasiones en el período, la Tierra Indígena **Munduruku**, que espera la publicación de su Resolución Declaratoria, es objeto de un

¹² Disponible en: <https://emergenciaindigena.apiboficial.org/relatorio/>

incremento ostensible de violaciones por parte de mineros, extractores de palmito y madereros, incentivados por el presidente Jair Bolsonaro. El 25 de marzo de 2021, la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborun, del municipio de Jacareacanga en el estado de Pará¹³, fue objeto de un ataque perpetrado por mineros y sus aliados, durante el cual su sede fue destruida e incendiada. La invasión masiva de mineros ilegales en las tierras indígenas Yanomami alcanza la aterradora cifra de **más de 20.000 mineros, y la devastación de un área equivalente al tamaño de 500 canchas de fútbol.**

La Tierra Indígena del pueblo **Yanomami** es testigo de violentas invasiones, con utilización ostensiva de armas de fuego, y de persecuciones como consecuencia de la intensificación de la actividad minera, desde 2020, año en que se produjo en la región un incremento del 30% de la degradación ambiental, lo que representa un área de 2.400.00 hectáreas, según el informe [Cicatrices en el bosque](#)¹⁴, realizado por el Instituto Socioambiental en colaboración con Hutukara Associação Yanomami y Wanassedume Associação Ye'kwana. El monitoreo indica que las cuencas de al menos cuatro ríos de la Tierra Indígena Yanomami (Mucajaí, Uraicoera, Catrimani y Parima) se encuentran entre las más afectadas. Los mineros se apoderaron de Porto do Arame, ubicado sobre el río Uraricoera, un punto estratégico de la Tierra Indígena Yanomami, ya que es el medio de acceso al territorio y

¹³ Disponible en: <http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2021/ataque-garimpeiro-se-de-associacao-mulheres-munduruku-jacareacanga-pa-25-03-2021/>.

¹⁴ Disponible en: https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/cicatrices-na-floresta-evolucao-do-garimpo-ilegal-na-ti-yanomami-em-2020_.

pasaron a controlar el tránsito por el lugar, incluso cobrando peaje a los propios indígenas.

El Supremo Tribunal Federal se manifestó en los autos de la ADPF 709 (Acción por Incumplimiento de Precepto Fundamental), determinando la remoción de los invasores de la Tierra Indígena Yanomami, en mayo de 2021¹⁵. A pesar de esto, puede observarse una intensificación de los conflictos, con episodios trágicos, como el del joven Edgar Yanomami, de 25 años, muerto atropellado por un avión perteneciente a mineros, en la Comunidad Homoxi¹⁶.

Algunas tierras indígenas sufren enormemente debido a los impactos generados por estos procesos. Este es el caso de la Tierra Indígena Ituna-Itatá, en el estado de Pará. Reservada para proteger a un grupo de pueblos originarios aislados, esta tierra indígena se convirtió en el blanco de grupos de acaparadores de tierras. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), un instituto de investigación gubernamental, que fueron recopilados por Greenpeace, prácticamente no había deforestación en esta tierra indígena antes de 2016. La devastación que en ese año era de 2 km² pasó a 13 km² en 2017, 16 km² en 2018 y explotó en 2019, llegando a 119 km². Así, con base en datos públicos oficiales, de un instituto de investigación vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, es decir, al propio gobierno federal, durante el primer año del mandato del presidente de la República, se registró un **incremento del 650%**

¹⁵ Disponível em: <https://apiboficial.org/files/2021/05/TPI-ADP-709.pdf>

¹⁶ Disponível em: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/07/30/indigena-yanomami-morre-ao-ser-atropelado-por-aviao-de-garimpeiros-no-meio-da-floresta.ghtml>

de las invasiones en la Tierra Indígena Ituna-Itatá, donde viven pueblos originarios aislados. En 2020, según la recopilación de los datos del INPE realizada por Greenpeace, el 94% del área de la Tierra Indígena Ituna-Itatá estaba loteada entre propietarios privados a través de declaraciones falsas del Registro Ambiental Rural, configurando una especie de acaparamiento preventivo de tierras.

BOLSONARO Y SUS ALIADOS SIEMBRAN VIOLENCIA Y MUERTE ENTRE FAMILIAS INDÍGENAS

*En el transcurso de una década (2011 a 2020), los conflictos en materia de tierras en Brasil aumentaron un **92%**;*

*De 2019 a 2020, bajo el Gobierno de Bolsonaro, el aumento fue del **25%**;*

El número de conflictos registrados en 2020 es el más alto desde 1985;

*Del total de familias afectadas por conflictos (171.625), el **56%** son familias indígenas (96.931).*

Fuente: Relatório CPT Conflitos no Campo, 2021¹⁷

¹⁷ Disponible en: <https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/conflitos-no-campo-brasil>

Ante los claros ataques legislativos contra los pueblos indígenas y a la debilidad institucional de las políticas públicas de medio ambiente y derechos humanos provocados por el gobierno de Bolsonaro, es imperativo reconocer la ineficiencia e incapacidad del actual gobierno para realizar la inspección y el monitoreo de las actividades económicas de explotación (minería y energía eléctrica) y de commodities.

La minería y el extractivismo ilegal están afectando cada vez más los territorios, la salud y los medios de vida de los pueblos originarios. Liberar la minería y la extracción ilegal dentro de las tierras indígenas es una de las prioridades políticas declaradas del presidente Jair Bolsonaro. Según consta en un documento oficial firmado por el presidente, la aprobación del PL 191/2000, que permite la minería en tierras indígenas, encabeza la lista de prioridades legislativas de la Presidencia¹⁸. Asimismo, el presidente Bolsonaro ha mostrado también de otras maneras su amplio apoyo a la minería ilegal dentro de las tierras indígenas, a través de la paralización o suspensión de las operaciones de inspección y combate a la extracción ilegal de minerales, por ejemplo ¹⁹.

En un caso absolutamente aberrante, el Gobierno Federal ofreció el avión oficial de las Fuerzas Armadas Brasileñas (FAB) para llevar

18 Disponible en <https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/03/lista-de-35-prioridades-pedidas-por-bolsonaro-a-pacheco-e-lira-inclui-privatizacao-da-elektrobras.ghtml>

19 Es el caso, por ejemplo, de la Operação Verde Brasil 2 (Operación Verde Brasil 2), en la región de Jacareacanga, Sudoeste del estado de Pará, que fue paralizada y debilitada en el segundo semestre de 2020. Cf: <https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-suspende-operacao-de-combate-garimpos-ilegais-em-terra-indigena-no-para-24570846>

a Brasilia a los representantes de los mineros que se encontraban ilegalmente en las tierras del pueblo Munduruku de Jacareacanga, en el estado de Pará, para conversar con el ex ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. El caso fue ampliamente publicado en Brasil, pero su repercusión no produjo ningún efecto legal, lo que muestra que la política de desmantelamiento institucional, mediante infrafinanciación, destitución de cargos y ocupación de puestos clave para asegurar la inacción de las instituciones de control del Estado brasileño, fue implementada con éxito y ya produce resultados.

Ninguno de estos actos o medidas debe entenderse de forma aislada. Juntos conforman una faceta antiindígena importante del gobierno, que favorece la destrucción de las tierras y vidas indígenas fomentando la minería y la extracción ilegal de minerales en sus territorios.

De acuerdo con los alertas del sistema DETER, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), el 72% de toda la actividad extractivista realizada en la Amazonía, entre enero y abril de 2020, tuvo lugar dentro de áreas que deberían estar bajo protección, o sea, tierras indígenas y unidades de conservación. En los primeros cuatro meses de 2020, el área de deforestación destinada al extractivismo aumentó un 13,44% dentro de las tierras indígenas de la Amazonía brasileña, en comparación con el mismo período del año pasado, de 383,3 hectáreas en 2019 a 434,9 en 2020²⁰.

²⁰ Disponible en: <https://www.greenpeace.org/brasil/blog/em-meio-a-covid-72-do-garimpo-na-amazonia-foi-em-areas-protegidas/>

Asimismo, según DETER/INPE, la deforestación provocada por la actividad minera marcó récords y avanzó especialmente en las tierras indígenas y en las unidades de conservación. La serie histórica DETER/INPE, que recopila datos desde 2015, indica que el mes en que más se devastó en el período fue mayo de 2019, con 34,47 km² deforestados. Luego le sigue julio de 2019, con 23,98 km². Además, 2020 mostró los peores meses de junio (21,85 km²), agosto (15,93 km²) y septiembre (7,2 km²) de la serie histórica.

Una encuesta realizada por el Instituto Escolhas, concluida en febrero de 2021, reveló que actualmente más de 6 millones de hectáreas dentro de las tierras indígenas y las unidades de conservación están amenazadas por la minería. El estudio analizó las solicitudes de exploración (requisitos y autorizaciones) para la minería aurífera registradas ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), que indican el interés por la minería en estas áreas. El resultado es que, a fines de 2020, el país ya tenía 6,2 millones de hectáreas amenazadas por la búsqueda de oro en áreas protegidas de la Amazonía Legal, lo que equivale a dos países del tamaño de Bélgica. De estas, 6.2 millones de hectáreas están amenazadas solo por la búsqueda de oro, 3.8 millones están en unidades de conservación y 2.4 millones están en tierras indígenas. El estudio también muestra que, desde 2018, ha habido un aumento progresivo de las solicitudes de permisos de minería en tierras indígenas, con un récord de 31 solicitudes en 2020²¹.

21 Disponible en: <https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/%C3%81reas-protegidas-ou-%C3%A1reas-amea%C3%A7adas-A-incessante-busca-pelo-ouro-em-Terras-Ind%C3%ADgenas-e-Unidades-de-Conserva%C3%A7%C3%A3o-na-Amaz%C3%B4nia.pdf>

Los dos primeros años de la administración del gobierno de Bolsonaro, 2019 y 2020, están marcados por un aumento histórico de la deforestación en la región amazónica. Este proceso conlleva la inestimable pérdida de la biodiversidad y, para los pueblos indígenas, significa la muerte y la destrucción de sus territorios, con la consecuente imposibilidad de mantener sus medios de vida y prácticas culturales, siendo la deforestación una de las formas más visibles de destrucción de las tierras indígenas y de las vidas que dependen de ellas.

Es cierto que el modelo de desarrollo destructivo de la naturaleza y de los territorios indígenas, adoptado por el Estado brasileño desconoce los derechos de los pueblos originarios y las necesidades de protección de la sociobiodiversidad. El aumento vertiginoso de la devastación forestal, que el mandatario trató de ocultar cuando entró en conflicto con el INPE, es un punto de inflexión en la historia brasileña y su significado no está representado solo en las cifras. Es necesario considerarlo como lo que es: un indicador de un cambio cualitativo y extremo en la política del Estado brasileño en relación con los pueblos indígenas y con la legalización de los procesos de deforestación.

De acuerdo con los datos más recientes del Boletín de Deforestación de la Amazonía Legal, desarrollado por Imazon, en marzo de 2021 se registró otro triste récord: se deforestaron 778 km² del territorio de la Amazonía Legal. Esto representa un aumento del 45% de la deforestación en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando esta totalizó 536 km². El área deforestada en marzo de 2021 representa el valor más alto en la

serie histórica de los últimos 10 años para el mes de marzo.

El bioma amazónico no es el único que sufre con los efectos perversos de la política del presidente Jair Bolsonaro. El Cerrado, bioma exclusivamente brasileño, responsable del 22% de la biodiversidad del territorio nacional y lugar donde ocurren diversas formas de ocupación humana, ha sufrido devastaciones e incendios, principalmente debido a la ganadería de carne. Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que este bioma ya ha perdido el 50% de su flora original y que la destrucción continúa a un ritmo acelerado. Datos del INPE revelan que, entre enero de 2019 y septiembre de 2020, el Cerrado enfrentó una cantidad récord de incendios: se registraron 93,9 mil en el período.

La devastación del Pantanal también se ha acelerado durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro. El año 2020 fue particularmente dramático: solo en octubre, se registraron 2.835 incendios. El resultado es que, alrededor del 23% del Pantanal se encuentra actualmente destruido, hecho que ha generado graves consecuencias para los pueblos originarios que viven en la región.

Invariablemente, el presidente Jair Bolsonaro acusa a los propios pueblos indígenas, cuya existencia está amenazada por la degradación ambiental, de ser los responsables de los incendios. Los pueblos indígenas tradicionalmente manejan el fuego en sus tierras, como una tecnología ancestral para preservar la producción y el bioma, una práctica que es totalmente distinta a la de los incendios criminales provocados que siguen a la deforestación.

Los pueblos indígenas son los principales defensores de los biomas en todo el mundo y también los grupos humanos más vulnerables. Defender los territorios indígenas es comprobadamente defender la preservación del medio ambiente. Ante la urgente necesidad de desacelerar los patrones de consumo y destrucción de la naturaleza y frenar la explotación y depredación de los territorios tradicionales y de sus recursos naturales es necesario rescatar y preservar los conocimientos, relaciones, formas de vida, técnicas y tecnologías que pueden ofrecernos la oportunidad de vivir otro mundo. No hay duda: los pueblos originarios son los que pueden salvarnos del apocalipsis climático.

LA ONU AFIRMA: LOS PUEBLOS INDÍGENAS SON LOS VERDADEROS GUARDIANES DE LOS BOSQUES

Estudio publicado por la FAO²² (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en 2021, señala que:

Alrededor del 35% de los bosques nativos de América Latina y del Caribe están ubicados en áreas ocupadas por pueblos indígenas;

Más del 80% de las tierras indígenas están cubiertas por bosques;

Entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosques se conservan gracias a la acción de los pueblos indígenas de la región. ■

22 Disponible en: <https://doi.org/10.4060/cb2953es>

**¿QUÉ
ACCIONES HA
EMPRENDIDO
APIB?**

Para enfrentar este escenario de ataques, violencia y muerte contra nuestros pueblos, así como de destrucción, devastación y explotación de nuestros territorios debido a intereses ajenos y de actos y omisiones estatales que atacan nuestros derechos, APIB, como instancia de movilización e incidencia en defensa de los pueblos indígenas en Brasil, emprende acciones de vigilancia y movilización constantemente.

Hemos ocupado todos los espacios públicos e institucionales existentes, nacionales e internacionales, a fin de luchar por los derechos de los pueblos indígenas. A menudo, en asociación con aliados nacionales e internacionales, a los que agradecemos la indiscutible solidaridad que han mostrado, sobre todo dada la gravedad de la situación actual. A continuación, enumeramos algunas de las principales iniciativas que hemos implementado en el último período, con el fin de eliminar o mínimamente reducir los riesgos con los que se deparan nuestros pueblos:

DENUNCIAS ANTE INSTITUCIONES MULTILATERALES

■ Denuncia contra Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional:

El 9 de agosto de 2021, día internacional de los pueblos indígenas, APIB a través de su Departamento Jurídico, presentó una denuncia

contra Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestros pueblos. El

documento detalla toda la cadena de acciones y omisiones del Gobierno Federal, bajo el mando de Bolsonaro, que se traduce en un aumento de la violencia en nuestros territorios, en el asesinato de líderes y en la muerte de más de 1.100 indígenas víctimas del COVID-19.

■ **Llamamiento urgente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y representación ante la CIDH:**

el 7 de julio de 2021, APIB, juntamente con Coiab, con la Comisión Arns, con ISA y con Conectas Derechos Humanos, enviaron representantes a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demandando medidas urgentes para impedir la aprobación del proyecto de ley.

■ **Memoriales extemporáneos presentados ante la OIT:**

APIB y Conaq, con el apoyo de la Central Única de los Trabajadores (CUT) y Terra de Direitos, presentaron Memoriales Extemporáneos ante la OIT denunciando el incumplimiento del Convenio 169. La representación menciona las amenazas legislativas, la omisión del Estado en cuanto a la prevención del COVID-19 en territorios indígenas y quilombolas, y el desmantelamiento de instituciones y políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas y quilombolas (2020).

COMUNICADO DE APIB A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Como relatado a lo largo de este dossier, la violencia que actualmente se está ejerciendo en Brasil contra los pueblos indígenas no tiene precedentes. Sabemos que los pueblos originarios han resistido a su destrucción desde la invasión colonial. Sin embargo, lo que es diferente desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de la República es la intención deliberada de destruir directa e indirectamente a los pueblos indígenas.

Es la primera vez en la historia de la política indigenista brasileña que tenemos un representante de la Fundación Nacional del Indio que aboga en contra de los intereses de los pueblos indígenas, en función de la presión de la agroindustria, la explotación irresponsable de los recursos naturales y la destrucción de la biodiversidad brasileña. El 1° de enero de 2019, en su primer acto de gobierno, Jair Bolsonaro emitió la Medida Provisional n.º 870/2019, mediante la cual se transfiere la atribución de demarcar las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, lo que representa un flagrante conflicto de intereses. Es simbólico que el primer acto de gobierno haya sido antiindígena.

En el caso del actual mandatario, observamos asombrados un proyecto de muerte que avanza acto tras acto. Y, aun así, existe una inercia institucional por parte de la Procuraduría General de la República, institución que debería iniciar las investigaciones ante el Supremo Tribunal Federal. Esta es la razón fundamental por la que los pueblos indígenas brasileños recurrieron a la Corte Penal Internacional (CPI).

No se puede permanecer indiferente ante la muerte cuando se la ve transformada en política de gobierno: el documento presentado el 9 de agosto, día internacional de los pueblos indígenas, en alianza con CADHu (Colectivo de Abogados de Derechos

Humanos) y la Comisión Arns, relata todo el proyecto antiindígena orquestado por Bolsonaro, señalando los fundamentos para su caracterización como crimen de genocidio.

Esta iniciativa está respaldada por la Constitución Federal de 1988, la cual determina en su art. 5, párr. 4, que “Brasil se somete a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a cuya creación ha manifestado adhesión”. El Estado brasileño es signatario del Estatuto de Roma, que instituye la CPI, y fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional mediante el Decreto Legislativo n.º 112/2002 y por el Decreto Presidencial n.º 4388/2002. Este es, por lo tanto, el tribunal competente a nivel internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad que no pueden ser investigados por la justicia brasileña.

Cuando toda la estructura jurisdiccional brasileña no se moviliza para investigar los crímenes de lesa humanidad de manera adecuada y responsabilizar a sus perpetradores, los tribunales internacionales a los que Brasil se somete tienen la palabra.

FORTALECIMIENTO DEL FRENTE DE ACCIÓN INTERNACIONAL

Entendemos que la ampliación y fortalecimiento de nuestras relaciones con socios internacionales es fundamental para reforzar nuestra capacidad de prevenir el avance de la agenda antiindígena en Brasil. Por lo tanto, hemos dedicado más energía a calificar nuestra inserción internacional, siempre en diálogo con instituciones aliadas, que tienen un desempeño destacado en temas y sectores relevantes para APIB:

Inauguramos una Movilización Indígena Internacional, liderada por APIB, con la participación de decenas de instituciones de más de 50 países. Nuestra intención es crear un espacio permanente de interacción y articulación con aliados internacionales, a fin de mantenerlos al tanto de la situación que estamos viviendo en Brasil y orientar de la mejor manera su participación en nuestras acciones y movilizaciones.

Este dossier es una iniciativa pensada para reflejar nuestra posición alrededor del mundo y contó con el trabajo de coordinación y redacción del Frente Internacional de APIB, que ha venido fortaleciéndose para reunir las capacidades para mejorar nuestra actuación internacional de manera autónoma y poderosa.

SEGUIMIENTO JUDICIAL DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS INDÍGENAS

El Departamento Jurídico de APIB ha venido fortaleciendo su actuación nacional e internacional, movilizando esfuerzos para el seguimiento de iniciativas que atañen los derechos indígenas ante el Poder Legislativo, proponiendo acciones de su propia autoría en defensa de los derechos de los pueblos y territorios indígenas, además de ofrecer asesoría y consultoría jurídica para casos estratégicos relacionados con líderes y conflictos territoriales.

Los objetivos principales del trabajo del Departamento Jurídico son:

■ INTERNACIONAL:

acciones ante tribunales y comisiones multilaterales de defensa de los derechos humanos. Es de destacar la actuación de este departamento ante la Corte Penal Internacional, como se informa en este dossier, así como ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y la movilización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente con la presentación de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, en garantizar los derechos de los pueblos Yanomami, Munduruku y Guajajara;

■ PENAL:

proporcionar asesoría legal a líderes indígenas que son objeto de persecución y criminalización. Con frecuencia se utiliza el Poder Judicial como un instrumento para intimidar a los líderes indígenas que luchan por los derechos de sus pueblos y por la garantía de integridad de sus territorios. APIB, por lo tanto, entiende que es fundamental ofrecer a estos líderes asesoría jurídica calificada, a fin de evitar que la perpetuación de esta práctica nociva de instrumentalización del poder estatal haga callar nuestras luchas;

■ CONTENCIOSO:

seguimiento de los procesos relacionados con conflictos territoriales;

■ LEGISLATIVO:

seguimiento de las propuestas legislativas relativas a los derechos de los pueblos indígenas en todas las instancias;

■ OBSERVATORIO DE JUSTICIA PENAL:

se trata de la creación de un espacio de colaboración entre líderes, investigadores e individuos que trabajan en el sistema de justicia penal, en diversas áreas del conocimiento, con el objetivo de monitorear las medidas jurídicas y la situación concreta de los pueblos indígenas incluidos en el sistema de justicia penal en calidad de investigados(as), procesados(as) o en etapa de ejecución de la pena.

Debido a la omisión del Estado ante la pandemia, APIB decidió recurrir al STF: por primera vez, acudimos directamente al máximo tribunal de nuestro ordenamiento jurídico para proponer una Acción por Incumplimiento del Precepto Fundamental. La ADPF 70 tuvo éxito en su demanda de obligar al gobierno a establecer un plan de emergencia para combatir el avance del COVID-19 en territorios indígenas. Esta acción inaugura un estatus inédito para APIB, que ahora tiene legitimidad para entablar acciones ante la CSJ.

ADPF 709 NO STF

En medio de la actual crisis sanitaria, el **FRENTE INDÍGENA DE ENFRENTAMIENTO JURÍDICO** ha supuesto un logro histórico en el Supremo Tribunal Federal (STF) para los **derechos de los pueblos indígenas**.

Ahora, el principal tribunal del país reconoce la **legitimidad de la Apib para interponer una acción directa ante el Tribunal Supremo**, lo que antes sólo se permitía a organizaciones como partidos políticos y entidades de clase como la Orden de Abogados de Brasil (OAB).

“Esta acción es la voz de los pueblos indígenas en el tribunal (de stf) y es una acción histórica porque por primera vez los indígenas llegan al poder judicial en nombre propio.”



El 8 de julio, se tomó una decisión unánime entre los ministros, determinando que el gobierno federal adoptara las siguientes medidas:



Determinación de la creación de **barreras sanitarias**



Determinación de instalar la **Sala de Situación** para gestionar las acciones de lucha contra la pandemia en relación con los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto reciente



Determinación de la elaboración y seguimiento de un **Plan de Confrontación de COVID-19** para los pueblos indígenas brasileños



Determinación de que los **servicios del subsistema de salud indígena son accesibles** a todos los habitantes de las aldeas indígenas, independientemente si sus reservas están homologadas o no. En cuanto a los no habitantes de las aldeas, por el momento, el uso del Subsistema de Salud Indígena sólo se producirá en ausencia de la disponibilidad del SUS general.

MONITOREO COMUNITARIO PARTICIPATIVO SOBRE COVID-19 Y PUEBLOS INDÍGENAS

La pandemia del COVID-19 puso en evidencia varias violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, debido al desinterés histórico por nuestras condiciones de vida y por nuestros derechos fundamentales que están garantizados por la Constitución. Ante la presión ejercida por la enfermedad, las organizaciones indígenas asumieron una posición enfática en la lucha contra la pandemia. Exigimos a los órganos responsables la atención adecuada para todas las necesidades de las personas afectadas por el COVID-19, incluso que se garanticen las condiciones necesarias para la adopción efectiva de recomendaciones de medidas preventivas tales como la distancia física, el acceso al agua potable, insumos para higiene personal y protección individual.

Además de estar a la vanguardia de varias medidas preventivas y luchar para reducir los impactos de la pandemia en las comunidades, las organizaciones indígenas también han hecho un seguimiento del avance de los casos y de las muertes por COVID-19, desde la confirmación de las primeras contaminaciones en Brasil. Se trata de un esfuerzo colectivo que marca históricamente la participación de los pueblos indígenas en tanto protagonistas de la lucha por un subsistema de salud diferenciado que está garantizado por la Constitución brasileña.

Ante las dificultades de acceso a los datos oficiales, la demora en las notificaciones y la falta de información en los registros

relacionados con la atención de la salud de los indígenas en zonas urbanas, el movimiento indígena inició un trabajo de monitoreo comunitario participativo de los casos y defunciones por COVID-19, coordinado por APIB con el Comisión Nacional por la Vida y la Memoria Indígena²³. A través de estas estrategias, APIB buscó aumentar la visibilidad de la ocurrencia y de los impactos de la pandemia entre los pueblos originarios de Brasil. En varios lugares del país, los líderes indígenas cuestionaron la información oficial presentada por el Gobierno.

MOVILIZACIONES EN BRASILIA Y EN LOS TERRITORIOS

Las amenazas institucionales que vivimos son tan graves que los pueblos indígenas de todo el país se han movilizado en acciones nacionales, en Brasilia, donde tiene origen una gran parte de estas amenazas, o en nuestros territorios en todo el país. Lo hacen incluso durante la peor pandemia que ha devastado el mundo, tal es la gravedad de la situación. A continuación, enumeramos las principales iniciativas de movilización coordinadas por APIB en el último período:

■ LEVANTE PELA TERRA:

este campamento, que tuvo inicio el 8 de junio de 2021, fue una movilización del movimiento indígena realizado en Brasilia con la finalidad de defender los derechos territoriales de los pueblos

²³ Disponible en: <https://emergenciaindigena.apiboficial.org/>

originarios. Más de 1500 indígenas se reunieron de manera presencial en esta iniciativa que fue la primera desde marzo de 2020, con el objetivo de enfrentar la agenda antiindígena que se está tratando en el Congreso Nacional y en el Poder Judicial. Durante tres semanas, 53 personas de las más diversas regiones hicieron oír sus maracas en la Capital Federal contra el Proyecto de Ley 490, que puede poner fin a la demarcación de tierras indígenas y que estaba en la agenda de votación y fue aprobado por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados. El movimiento indígena también siguió el desarrollo del juicio que puede definir el futuro de la demarcación de tierras y que estaba en la agenda del Supremo Tribunal Federal, pero fue postergado para el 25 de agosto.

■ **CAMPAMENTO TIERRA LIBRE 2021 Y ABRIL INDÍGENA:**

ocupamos las redes como nunca lo hicimos anteriormente en la historia de Abril Indígena. Después del peor mes de marzo de nuestras vidas, con el agravamiento de la pandemia del COVID-19, APIB realizó el más grande Campamento Tierra Libre virtual de la historia: se llegó a más de 5.7 millones de personas a través de todas las redes APIB. Se realizaron 102 transmisiones en vivo, con la participación de 46 organizaciones y se publicaron 164 artículos en la prensa.

■ **ALERTA CONGRESO:**

ante las numerosas denuncias de amenazas a los derechos indígenas que se tramitan en el Congreso Nacional, APIB movilizó

a más de 60.000 personas con el objetivo de presionar a los diputados de la Cámara Federal, a través de un llamado a la acción disponible en el sitio web de APIB que enviaba directamente a los congresistas un correo electrónico solicitando que se archivaran los proyectos de ley antiindígena.

■ **VACINA PARENTE:**

campana de APIB para articular tanto política como jurídicamente la garantía de vacunación contra el COVID-19 para todos los pueblos originarios de Brasil y elaborar acciones de comunicación para incentivar la vacunación entre los indígenas y hacer frente a la difusión de noticias falsas sobre el tema. La acción forma parte del Plan de Emergencia Indígena de APIB para combatir la pandemia entre los pueblos indígenas.

FORTALECIMIENTO DEL FRENTE DE COMUNICACIÓN

Ante cada nuevo desafío, surge la necesidad de reinventar nuestras estrategias. Los intensos ataques a la vida de los pueblos indígenas y la pandemia del COVID-19 llegaron en 2020 de una manera avasalladora, obligando a APIB a crear y reprogramar varios frentes de acción, incluso en materia de comunicación.

Con la necesidad de adoptar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto al aislamiento social, la comunicación pasó a tener un papel aún más central para facilitar la ejecución de las actividades relacionadas con APIB. El movimiento indígena históricamente se caracteriza por propiciar

movilizaciones presenciales como un proceso de fortalecimiento político y cultural de los pueblos. Las estrategias de APIB se basaban en esta dimensión presencial y la comunicación estaba estructurada en conjunto con sus aliados, sin un equipo propio.

Desde marzo de 2020 hasta julio de 2021, APIB formó un equipo compuesto por 10 personas que trabajan en las siguientes líneas de acción de la comunicación: **Movilización; Asesoría de prensa; Redes; Campañas; Programación de sitios web; Diseño e internacional.** Durante este mismo período, fortalecimos las relaciones de colaboración entre el equipo de comunicación de APIB y los equipos de las seis organizaciones indígenas regionales de base de APIB, a fin de calificar la producción de contenido de nuestra red. Enfatizamos las relaciones estratégicas con **Media India, Media Ninja y las organizaciones indigenistas de la Movilización Nacional Indígena (NMI).** Construimos un plan de comunicación de APIB que es evaluado y actualizado cada seis meses. Rediseñamos el sitio web institucional de APIB (apiboficial.org), que cuenta con un promedio de 100.000 visitas mensuales y es actualizado a cada nueva campaña o acción estratégica de la organización y del movimiento indígena.


Creamos el sitio web del plan [Emergencia Indígena](https://emergenciaindigena.apiboficial.org)²⁴ para apoyar las estrategias de enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 entre los pueblos indígenas.

El alcance de APIB en las redes sociales creció un 140% el último año, llegando a un promedio mensual de 8 a 10 millones de

24 Disponible en: <https://emergenciaindigena.apiboficial.org>

personas. Hasta julio de 2021, APIB tenía 257.017 seguidores, sumando las cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, lo que representa un incremento del 145% del número de seguidores respecto a marzo de 2020. La relación de APIB con la prensa brasileña e internacional da como resultado un promedio de 2 artículos publicados por día, reforzando la estrategia de regionalizar la relación con los medios de comunicación a fin de ampliar el alcance de las publicaciones en todo Brasil y en el mundo. ■

**LLAMADOS
A LA ACCIÓN**



Ante el actual contexto amenazador que impacta no solo la vida de los pueblos indígenas, sino toda la integridad socioambiental de sus tierras, produciendo consecuencias directas sobre el agravamiento de la crisis climática y ambiental que afecta a todo el planeta, APIB solicita el apoyo de su red de aliados en lo referente a los siguientes temas:

1. APOYO POLÍTICO

- Exigir al gobierno brasileño el pleno cumplimiento y fortalecimiento de la legislación ambiental interna;
- Presionar para que el Congreso brasileño suspenda la tramitación de todas las iniciativas legislativas antiindígena, en particular las de los proyectos de ley 490 y 2633;
- Exigir al gobierno brasileño que demarque las tierras indígenas que aún se encuentran en proceso de homologación;
- Imponer mecanismos de trazabilidad para productos originarios de Brasil, a fin de asegurar que no sean el resultado de conflictos territoriales y explotación ilegal de tierras indígenas;
- Exigir al gobierno brasileño una mayor ambición climática, haciendo que la demarcación de las tierras indígenas y los programas de reducción de la deforestación sean los pilares centrales de la reducción de emisiones;

- Boicotear los productos brasileños derivados de procesos de explotación y violación de los derechos de los pueblos indígenas;
- Boicotear los acuerdos económicos y las cooperaciones multilaterales que violen los tratados internacionales sobre derechos indígenas, tal como el Convenio 169 de la OIT.

2. FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS

- Apoyar la realización de capacitaciones permanentes en las aldeas con el objetivo de intercambiar y fortalecer el conocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas, específicamente sobre los derechos de las mujeres y la gestión ambiental y territorial de las tierras indígenas;
- Apoyar la estructuración de una agenda de discusión amplia sobre el clima y la diversidad biológica desde la perspectiva de las mujeres indígenas, para debates nacionales e internacionales;
- Fortalecer los equipos de brigadistas indígenas para prevenir y combatir los incendios forestales, a través de cursos de capacitación, profesionalización y empleabilidad;
- Mantener una agenda de capacitación técnica para el equipo de comunicadores indígenas, especialmente jóvenes y mujeres, sobre medios de comunicación, periodismo y edición de videos, potenciando su especialización y ampliando su capacidad comunicativa.


3. APOYO FINANCIERO DIRECTO A ORGANIZACIONES INDÍGENAS


- Asegurar la creación y mantenimiento de mecanismos financieros internacionales con fondos de apoyo específicos para los pueblos indígenas;
- Acceso a fondos para la adaptación al cambio climático, especialmente al Fondo Verde para el Clima (GFC)
- Apoyo financiero para los viajes y la participación de líderes indígenas en reuniones internacionales y multilaterales sobre temas relacionados con la defensa del medio ambiente, la crisis climática, la defensa de los territorios, además de otros que sean pertinentes para los pueblos indígenas;
- Fomentar donaciones para campañas de financiamiento colectivo, cuya recaudación contribuya a la compra de alimentos y a financiar la estructura necesaria para las movilizaciones nacionales, especialmente aquellas que requieran el desplazamiento de personas indígenas hacia la capital federal. ■

***Apoyar a los pueblos indígenas accediendo a:
apiboficial.org***



Publicado por la **Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil**
Brasília, DF, BR

 apiboficial.org

 internacional@apiboficial.org

